

Los desafíos del movimiento estudiantil

Retoman demandas vigentes

por Ivania Garrido*

Hace unos días, la biblioteca del Congreso acogió a diversos actores del mundo de la educación superior para discutir sobre un nuevo sistema de financiamiento estudiantil y sobre la reorganización de la deuda en educación superior, jornada que finalizó con la aprobación de la idea de legislar, dando puntapié a una conversación que para el mundo de las y los estudiantes significa años de acumulación de fuerza, instalando mediante movilizaciones y banderas, que estudiar es un derecho que debe ser garantizado por el Estado en todas sus dimensiones. Cuando observamos la evolución del Movimiento Estudiantil, ineludiblemente recordamos periodos históricos que permitieron disputar el relato común y conseguir la adhesión de un país entero, que con mucha fuerza supo ver en las luchas estudiantiles, demandas compartidas para el pueblo de Chile.

La pandemia y las crisis políticas de los últimos años, han generado repliegues en la participación, movilizándolo nuevas formas de vincularse con la colectividad y abriendo discusiones sobre principios y valores como la equidad, el género y la inclusión que parecieran haber estado resueltos como mínimos civilizatorios. El individuo versus lo colectivo gana posiciones y en ello, la organización estudiantil se ve influenciada por este fenómeno global, que lejos de aminorar las convicciones, nos presenta el reto de buscar con más audacia la presencia de las y los jóvenes en la organización universitaria.

Crisis del sistema

Los espacios de intercambio entre comunidades estudiantiles, evidencian que las crisis que sostuvimos hace más de una década respecto de un modelo de financiamiento agotado, incapaz de autofinanciarse y captar del grueso del 1,2% del PIB que se invierte en Educación Superior, siguen vigentes. En nuestras universidades públicas como la Universidad Austral o la Universidad de la Frontera, detrás de los hermosos campus verdes inundados de naturaleza, vive la crisis del sistema de financiamiento. Los mismos edificios centrales que han visto egresar a miles de profesionales que contribuyen al desarrollo del país, hoy se encuentran tomados por estudiantes y trabajadores, quienes se han visto obligados a paralizar sus actividades para visibilizar las condiciones de precariedad.

La organización del presupuesto y los mecanismos de gestión financiera en educación superior están lejos de ser una discusión sólo técnica. Requerimos mirar los problemas cotidianos del mundo estudiantil, los cuales tienen múltiples expresiones ligadas al bienestar, que necesitamos para mantenernos saludables mientras estudiamos, condiciones que afectan directamente la posibilidad de permanencia en nuestras instituciones. No es azaroso que en primer año de carrera, un 28,8% de los estudiantes desertan del proceso, de los cuales más de la mitad nunca retoman los estudios.

Si hacemos zoom, nos encontramos con el siguiente escenario: cuando el presupuesto se ve asfixiado por el CAE, uno de los beneficios estudiantiles que pierde es nuestra alimentación. El monto entregado por la Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES), resulta insuficiente para cubrir una dieta saludable. Este beneficio, suele agotarse antes de finalizar el mes, obligando a los estudiantes a recurrir a comida chatarra, lo que repercute en nuestro rendimiento. Resulta urgente que el Estado no sólo aumente el monto de la BAES, sino que también garantice su reajuste periódico en función del costo de vida. Junto con ello, las IES deben garantizar el acceso a una alimentación digna, de modo que al menos existan casinos con precios justos y con opciones acordes a las restricciones alimentarias.

Otro perdedor, es el transporte. La mejora de acceso y servicio es una demanda plenamente vigente. Para ello, se sitúan como estratégicas las alianzas entre universidades, gobiernos regionales y comunales, ar-

ticulación en la cual debemos evaluar colaboraciones público privadas que mejoren el acceso al servicio. Es preocupante que en algunos medios de transporte no se pueda acceder a descuentos con la Tarjeta Nacional del Estudiante (TNE). Es necesario modernizar el sistema, dejando a un lado los argumentos que sugieren que el pago electrónico aumentaría la evasión, promoviendo el derecho al traslado como parte de las dimensiones que deben ser garantizadas por el Estado para estudiar.

Competencia desigual

Las condiciones propias del proceso académico como es la innovación pedagógica, la promoción de la investigación con fines públicos, la inversión en mejorar la salud mental de las y los estudiantes, entre otros elementos, son también aspectos que se ven afectados por la organización de los recursos del Estado. En esa línea, las condiciones laborales de las y los trabajadores, hoy sobre la mesa por los masivos despidos en univer-

sidades del Estado, por cierto influyen en la calidad de los procesos académicos, debido a que la oferta laboral de las universidades con perspectiva pública está en una permanente competencia desigual con las universidades privadas sin rol público.

Estas son las principales banderas que hoy deben volver a aglutinar al movimiento estudiantil, con perspectiva de recuperar el espacio público bajo consignas que nos permitan avanzar en las problemáticas planteadas. La FEC en su rol histórico, debe cumplir un rol dinamizador del debate, estamos convencidos de ello. El momento político en el que nos toca como dirigencias abordar la discusión para reformar el modelo de financiamiento y condonar el CAE, presenta correlaciones de fuerzas complejas para el mundo social. Los sectores conservadores buscan mantener la educación como un bien de mercado, a pesar del diagnóstico que muestra crudas cifras en relación al daño que el CAE le ha generado al país.

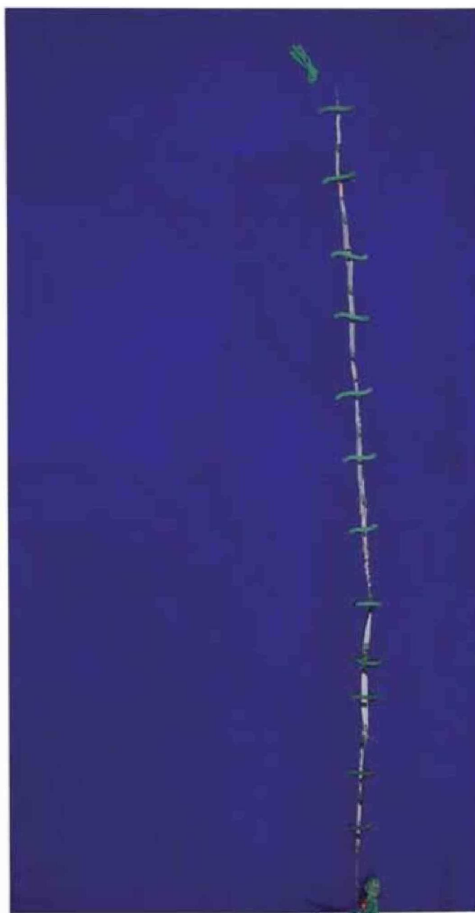
Nuevo ciclo de movilizaciones

En Chile, el endeudamiento por estudiar corresponde a la segunda razón principal de deuda y si abordamos el debate con perspectiva de género, el 92% de las mujeres deudoras del CAE no lograron finalizar sus estudios, enfrentando barreras como la carga de cuidados en sus hogares, la discriminación en el empleo y la precariedad en el sueldo. Resulta evidente que los actores del mundo educativo pongamos todos los esfuerzos en articular energías para enfrentar la arremetida de los sectores del gran empresariado en contra de la educación pública.

Tenemos la convicción de que un nuevo ciclo de movilizaciones por el derecho a la educación, que tenga a la base todos los diagnósticos ya señalados, va a requerir la adhesión de las perspectivas que han sido aliadas en la lucha. Una de ellas, es la fuerza del movimiento feminista. Las y los jóvenes no sólo debemos ser agentes de cambio, sino también la vanguardia frente al avance de la ultraderecha, que amenaza nuestros derechos como mujeres y disidencias sexo-genericas. En la región del Bío Bío, este desafío se ve claramente reflejado en las políticas promovidas por Hector Muñoz, actual alcalde de Concepción y miembro del Partido Social Cristiano, quien representa un retroceso en derechos fundamentales como el acceso a una educación sexual integral, el reconocimiento pleno de compañeras y compañeros trans, y la garantía de nuestros derechos reproductivos.

La invitación de la FEC será la construcción de un proyecto de mayorías que incorporen estas y otras luchas, agrupadas en la búsqueda de mejorar las condiciones de dignidad para las y los jóvenes de nuestra región, contribuyendo en los debates que impulsen políticas de país más equitativas, con una fuerte base de principios en la justicia social y de género. ■

*Presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción (FEC)



Felipe Cusicanqui, Azul (Técnica mixta sobre tela), 2024
 (Exposición en Galería P. Ready hasta el 29 de enero)